

ESTUDIOS CUANTITATIVOS SOBRE PERCEPCIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS A LA VERDAD, LA JUSTICIA Y LA REPARACIÓN

Estudio Percepciones y opiniones de los colombianos sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación

Institución: Fundación Social, Consejo noruego para Refugiados, ICTJ y Consejería en Proyectos Año: 2006

Metodología (Econometría)

Población: Urbana

Temas: justicia, verdad, reparación y reconciliación.

Muestra: representativa de los hogares municipales del país/probabilística, de conglomerados estratificados y trietápica.

Tamaño muestra: 2.000 encuestas

Clasificación muestra: Afectados/ no afectados por acciones de grupos armados

Percepciones sobre el conflicto y los crímenes

- **Casi un millón de encuestados han sido afectados directamente por GAI (12% de los hogares urbanos).**
- Según las opiniones la manifestación más grave del conflicto armado es el secuestro. El 48% de la población considera este delito como el más grave; le sigue el asesinato con el 40%, el desplazamiento con el 36% y la violencia sexual con el 33%.
- La apropiación ilegal de bienes y la destrucción de la infraestructura sólo son considerados graves por un 10 % de la población.
- Para los departamentos de Norte de Santander, Santander, Cundinamarca, Meta y Caquetá las minas antipersonas alcanza un 30.8% de importancia.

Sobre la efectividad de la justicia

- **Un 51.3% de la población considera que un medio efectivo para solucionar el conflicto es llevar a los miembros de los grupos ante la justicia.** El 48.7% estima que llevarlos a la justicia no facilitaría la solución del conflicto.
- El referente de si el enjuiciamiento traería verdad sobre lo ocurrido fue positivo en 57%; no obstante, buena parte de la población (43%) considera negativamente esta posibilidad.
- Si la justicia es efectiva para conseguir la reconciliación el 58% de la opinión lo consideró afirmativo y 42% negativamente.
- Sobre estos promedios observados en los referentes de la efectividad de la justicia, no existe diferencia entre afectados y no afectados ni en aquellos con mayor o menor nivel de educación.
- Existen diferencias significativas en los subgrupos poblacionales: en primer lugar, las personas de estratos 3 a 6 creen menos en la justicia como medio para revelar la verdad; y en segundo lugar, las personas afectadas, así como la población con mayor educación y menor de 30 años, consideran que en menor medida los enjuiciamiento de los miembros de los GAI contribuirá a la reconciliación.

Aplicación de la Justicia

- **El 68.6%, está a favor de mantener o aumentar las penas establecidas en la legislación;** un 45.5% de considera que se les debe imponer las penas ordinarias; y un 23.1% estima que la justicia debe aplicarse con más rigor y con ello las penas mayores.
- Sólo un 26.3% plantea que las penas se disminuyan y apenas un 5.1% considera que no debe imponerse ningún tipo de penas.

- A favor de un mayor rigor en las penas, se encuentra la población afectada, las mujeres, los estratos altos; quienes apoyarían una rebaja de penas son personas con menor educación, aquellas que no trabajan, las personas mayores de 50 años.
- **La opinión en un 63.3% estima que debe juzgarse a todos los integrantes de los grupos armados; 35 % solo los líderes y 2% los rasos.**
- El 75% de las personas está totalmente de acuerdo con que los grupos armados deben ser juzgados y condenados por el Estado.

Víctimas del conflicto

- **Los miembros del Ejército y de la Policía reciben un alto reconocimiento como víctimas: un 68.1% estima que sus miembros son víctimas.** El 24.3% y un 21.5% consideran que los paramilitares y los guerrilleros, respectivamente, deben ser tratados como víctimas. Quienes consideran víctimas a la guerrilla y los paramilitares son personas con menor educación y afectada por la violencia (particularmente en la población de las regiones central y occidental)
- Sobre la necesidad de compensar a las víctimas, la opinión a favor es muy alta, las favorables se encuentran en las personas de estratos 3 a 6 y en la población de Bogotá.

Percepciones sobre la verdad

- El 79% de la población en general entiende que la verdad es un derecho; un 59% de los afectados dice saber con certeza lo que le sucedió y un **55% de los afectados cree que es mejor 'no saber nada'**.
- **El 63% de la población urbana considera que es importante conocer la verdad.**
- La educación y el estrato socioeconómico son factores significativos en la probabilidad de saber que conocer la verdad es un derecho.
- El porcentaje de aquellos con interés de que se conozca la verdad es significativamente mayor en la población de no afectados con relación a los afectados. **En la población que estima que es mejor no conocer la verdad (37% en total) se advierte que tal apreciación es mucho más notoria en la población afectada (55%) que en la no afectada (35%).**
- Quienes manifiestan querer conocer la verdad (63% de la población total) lo hacen mayoritariamente por las siguientes razones: un 72% con el fin de entender lo que pasó, independientemente de su condición de afectados o no afectados. Apenas el 5% expresa que su principal motivo es para saber a quién odiar o tomar venganza.
- Un 48% manifestó que esclarecer los hechos no servirá de nada y un 10% no cree que la verdad sea revelada.
- Un 49% de la población, sin importar su condición de afectada o no afectada, está de acuerdo con que la verdad de lo sucedido sea informada públicamente y el 51% restante no está de acuerdo.
- Sólo un 57% considera importante recordar lo que ha pasado en Colombia con respecto al conflicto armado, proporción que es mayor en los afectados (63%) que en los no afectados (56%).

Percepciones sobre el alcance de la reparación

- **El 89.43% de la población urbana considera que las víctimas deben ser compensadas por el daño que han sufrido.**
- Un 77.79% estiman que sean los máximos jefes quienes reparen las víctimas, un 73.98% cree que los que dirigieron a quienes cometieron la agresión y un 67.13% está de acuerdo con que lo hagan los actores que cometieron directamente el daño.
- El 68.7% opina que el Estado es quien deba reparar el daño.
- "En resumen, los colombianos residentes en las zonas urbanas están muy de acuerdo con varias acciones que impliquen reparación a las víctimas [...]: la colaboración de los responsables en la localización de los secuestrados

y los desaparecidos y la devolución de los bienes sustraídos a las víctimas son las medidas más apoyadas. De igual forma, también es bastante respaldada la alternativa de que el Estado otorgue bienes y servicios especiales a las personas afectadas por el conflicto.”

Sobre la participación en política o en las FFAA

- **Sólo un 31.8% (27.2% de los afectados y un 32.5% de los no afectados) considera que una vez solucionado el conflicto armado los agresores participen en política y pueda gobernar si son elegidos.**
- El 33.8% de los colombianos residentes en áreas urbanas manifiestan su acuerdo frente a la posibilidad de que, luego de finalizado el conflicto, los agresores puedan formar parte de las Fuerzas Armadas del Estado Colombiano.

Estudio Percepciones sobre Justicia, Paz, Verdad, Reparación y Reconciliación en población rural colombiana

Institución: Fundación Social

Año: 2008

Metodología (Ipsos Napoleón Franco)

- Población: Rural

- Temas: justicia, verdad, reparación, Paz y reconciliación.

- Muestra: La muestra efectiva es de 2.000 entrevistas que representan a 481.822 hogares. De ellos, 799 corresponde a población no afectada, y 1.201 a población no afectada/probabilística, multietápica, por conglomerados, sistemática.

Se definió como ámbito geográfico los municipios del país con menos de 10.000 habitantes en la cabecera.

Clasificación muestra: Afectados/ no afectados por acciones de grupos

Percepciones sobre el conflicto y los crímenes

- **El 20% de los entrevistados respondió afirmativamente haber sido afectado en el marco del conflicto o por alguna grave violación a los derechos humanos.**
- **La zona rural más afectada es la occidental (Valle del Cauca) mientras que en la urbana es la oriental (Caquetá, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander).**
- El 85% de la población no afectada reporta que no ha conocido de casos de violencia sexual; este porcentaje disminuye entre la población afectada que no conoce de la comisión de estos crímenes al 74%.
- Las mismas proporciones se presentan en cuanto al delito de reclutamiento forzado: el 86% de no afectado dice no haber conocido de este delito, mientras el 74% de los afectados igualmente dice no haber conocido el delito. Apenas 3 de cada 10 dice haber conocido de este delito y el 10% dice haber conocido de este delito más de 5 veces.
- Uno de cada diez hogares dice haber sido afectado por la violencia en lo que toca a sus bienes. Esta proporción aumenta sobre todo en hogares de estrato 1 y en el departamento de Atlántico. Es decir, el 90% de la población en general dice no haber perdido un bien y el 97% de la población no afectada dice lo mismo; por su parte, la población afectada en un 39% dice haber perdido un bien.
- **El 40% de los afectados considera que la más grave manifestación del conflicto armado son los ataques a la población civil; el 38% de los no afectados respondieron de forma igual.** El 39% de la población afectada estima que el segundo delito más grave es el desplazamiento; el 31 % estima igualmente que se trata de un delito grave. En tercer lugar, está el secuestro. Pero existe una diferencia entre la población afectada (36%) y la no afectada (42%).

- **Ante las perspectivas de solución al conflicto armado la mayoría de las personas afectadas coincide en mayor presencia del Estado (86%); 76% diálogo entre los grupos y el Estado; 70% la acción militar; y 66% la intervención de países amigos como mediadores del conflicto.**
- Si se alcanzara la paz en Colombia el 58% la población afectada considera que aumentaría el sentido de pertenencia al país; 50% cree que aumentaría la confianza en las instituciones; el 42% que aumentaría el cumplimiento de las normas, el 44% considera que se mantendría igual; el 50% piensa que la corrupción acabaría; el 68% que la inseguridad disminuiría; el 61% cree que disminuiría la pobreza y el 59% cree que disminuiría la injusticia. Los mismos porcentajes se repiten en la población no afectada.
- Frente a la terminación del conflicto se percibe más incertidumbre en cuanto a que el 46% dice no saber cuándo se va acabar. Simultáneamente el 18% de la población rural piensa que el conflicto no acabará nunca.
- **El promedio es de 10 años a 14 años lo que tomará ponerle fin al conflicto.**

Actitudes y percepciones sobre la justicia

- **Tanto afectados y no afectados (80% y 78% respectivamente) coinciden en que juzgar a los responsables de los crímenes más graves es un medio efectivo para superar la violencia.** Este juzgamiento a los responsables el 86% cree que sirve para revelar la verdad; el 81% para la reconciliación. Hay menos confianza en la justicia a medida que aumenta el estrato social.
- **En cuanto a quiénes debería ser juzgados tanto afectados como no afectados (84%) coinciden en que todos los miembros de los grupos armados. El 15% considera que solo los comandantes y el 1% solo los miembros rasos.**
- Hay una expectativa de que la justicia sea más severa en la población rural que la urbana de acuerdo a las investigaciones realizadas en el 2006. Más del 60% espera que el tratamiento de la justicia no sea excepcional. El 64% de los afectados y el 62% de los no afectados considera que hacer cumplir las penas a los agresores tal como están establecidas en la ley podría solucionar el conflicto; el 27% de afectados como no afectados cree que incrementándose las penas podría solucionarse el conflicto; y sólo el 7% que se les rebaje las penas y el 2% que no se imponga ninguna pena.
- Frente al tema de los responsables de los delitos cometidos en el marco del conflicto aunque la mayoría señala a la guerrilla (46%), un buen porcentaje (21%) considera a los políticos que han apoyado a los grupos armados, como el caso de los parapólicos, los principales responsables.
- En lo que el Estado debe hacer la mayoría tiende a estar de acuerdo (89%) a que juzgue y condene a los responsables; algo menos del 18% a combatirlo militarmente y en general un desacuerdo ante la opción de perdonarlos (68%)
- **El 48% considera que los miembros de la Fuerza Pública sean tratados como víctimas;** el 31% considera que la guerrilla debe ser tratada como víctimas y el 30% igualmente considera que los paramilitares sea considerados víctimas.

Percepciones y actitudes sobre la verdad

- El 92% de los encuestados afectados y el 96% de los no afectados considera que la verdad sí es un derecho
- El 51% de los encuestados no quisiera que su verdad sea hecha pública. Así respondieron el 48% de los afectados y el 43% de los no afectados.
- Las razones de conocer la verdad varían entre afectados y no afectados. Los primeros esperarían que con eso podrían conocer la verdad de lo que ocurrió; los segundos, la razón es la necesidad de reclamar justicia. Quienes no desean saber la verdad acuden al miedo y a la posibilidad de que con ello puedan tomar represalias.
- El 71% de ellos cree que la justicia no está adelantado las investigaciones requeridas para conocer la verdad.
- La institución con la cual la mayoría de encuestados relaciona la labor de búsqueda de la verdad es la Fiscalía (49%); la CNRR (45%); La presidencia de la República (41%); la defensoría del Pueblo (38%).

Percepciones y actitudes sobre la reparación

- Afectados y no afectados esperan por igual que quien hizo daño lo repare (70%); 64% cree que deben ser los máximos jefes de los grupos armados; 54% aquél que dirigía a quien cometió la agresión; 35% el Estado colombiano. En comparación a la encuesta del 2006 había mayor expectativa que la reparación esté en manos del Estado.
- El 95% de los afectados y no afectados están de acuerdo que una medida de reparación viable es que los responsables colaboren con la localización de los secuestrados y desaparecidos (95%); en la misma proporción que paguen una condena en la cárcel; que deben decir toda la verdad acerca de lo ocurrido; y que el Estado otorgue bienes y servicios a los afectados.
- Frente a qué instituciones son las más importantes para garantizar la reparación, se encuentran algunas diferencias entre afectados y no afectados. Los primeros mencionan con más frecuencia la CNRR, mientras que los segundos mencionan en primer lugar a la Presidencia de la República.

Estudio Reparación en Colombia: ¿Qué quieren las víctimas?

Institución: - Universidad de los Andes Programa de Investigación sobre Conflicto Armado y Construcción de Paz(Conpaz), Universidad de los Andes y (GIZ)- Profis.

Año: 2008

Metodología: Angelika Rettberg

- Población: Urbana
- Temas: justicia, verdad, reparación, Paz y reconciliación.
- Muestra: El total de personas encuestadas fue de 1.014
- Clasificación muestra: Víctimas

Formas de victimización

- Porcentaje de personas victimizadas: desplazamiento propio (74,3%), un homicidio de un familiar (53,6%), un desplazamiento forzado de un familiar (40,1%), un homicidio de alguien en la comunidad (22,5%) y una desaparición forzada en la familia (20,7%). Las personas de bajos ingresos son las más afectadas.

Responsables de la victimización

- **Los principales responsables de los hechos recogidos por la encuesta son las AUC y las FARC.** Las llamadas Águilas Negras figuran entre los actores responsables también. No figuran ni el ELN ni el EPL. El Estado es señalado como responsable en muy pocos casos.

Proximidad entre víctimas y victimarios

- La mayoría de las personas no conocen a quienes son responsables del crimen contra sí mismos, contra la familia y del que ocurrió en la comunidad. Sin embargo, un 18,1% de las personas (una quinta parte de la muestra) afirman que sí conocen a los responsables del crimen contra sí mismos, 16,6% a los responsables del crimen contra un familiar y 7% a los responsables del crimen.
- 9,1% saben dónde viven los responsables del crimen. 8,1% dijeron saber dónde viven los responsables de los crímenes contra familiares y 3,5% dijeron saber dónde viven los responsables de los crímenes contra alguien en su comunidad.

Preferencias sobre medidas de reparación

- **Las personas encuestadas otorgaron mayor importancia al cubrimiento de sus necesidades económicas (45,5%) y al establecimiento de la verdad sobre los hechos (44%).** Que den dinero para cubrir los daños el 37%. El que los responsables les pidieran perdón, obtuvo el menor porcentaje de respuestas (5.1%).
- Distinguiendo por tipos de victimización, las anteriores preferencias se mantienen. Se notan excepciones en las víctimas del secuestro, que otorgan máxima importancia a la compensación por la pérdida y los daños causados, y las víctimas de tortura, para quienes la segunda reparación más importante es la garantía de no repetición. Las víctimas de desplazamiento también otorgan el principal peso a las medidas de reparación materiales (cubrir necesidades económicas —47,2%— y compensación por los daños —40,8%—). Para las víctimas de desaparición, la medida de reparación preferida es saber la verdad (51%).

Preferencias sobre la verdad y la justicia

- Se identifica una importante diferencia entre hombres y mujeres acerca de si la verdad debe conocerse en privado o públicamente: la mayoría de las mujeres (55%) prefirieron la verdad en privado, mientras que un 58,9% de los hombres la prefieren en público.
- A la pregunta sobre si habían escuchado hablar de comisiones de verdad, la mayoría de las personas encuestadas respondió negativamente. Sin embargo, la mayoría considera, sin saberlo, que son útiles.
- La mayoría de las personas opinaron que los culpables “deberían pagarles a sus víctimas” y “deberían ser encarcelados” (37% ambas). La prohibición de ocupar cargos públicos aparece como tercera opción (17%), seguida por el pago de una multa al Estado (6%).
- Acerca de la finalidad de los juicios contra los responsables de los diferentes crímenes, el 41,1% considera que éstos servirían para conocer la verdad; 26,1% para permitir que las personas puedan volver a convivir; 11% sugirió que los juicios son para perdonar los actos cometidos; 4,4% para vengar los actos cometidos y 4,3% para olvidar lo ocurrido.
- Un 48,8% considera que debe hacerse la distinción entre autor intelectual y material; un 36,9% rechazó esa opción y 37,5% de las personas opinó que quienes ordenan deben recibir un castigo más fuerte que quienes ejecutan el crimen (9,2%).
- El 27,6% (un cuarto de las personas) prefiere que sean los órganos nacionales de justicia quien juzgue a los responsables; 18,7% las cortes internacionales; 17,2% un sistema mixto; 15,5% la comunidad (21,8% prefirió a través de jurados de conciencia; 16,9% las consultas y foros sociales, y 5,5% los tribunales indígenas).

Estudio Percepciones de Paz y Derechos Humanos entre la opinión pública colombiana

Institución: OXFAM-CINEP-Medios para la Paz-Programa para la Paz-Somos defensores- Embajada Británica

Año: 2011

Metodología: Centro Nacional de Consultoría

- Población: Urbana de siete de las principales ciudades del país: Bogotá, Cali, Pasto, Medellín, Barranquilla, Cúcuta y Villavicencio.

- Temas: conflicto, ONG y derechos humanos

- Muestra: El total de personas encuestadas fue 610

- Clasificación muestra: Estrato 1 al 6.

Percepción de la situación general del conflicto y compromiso personal con la paz y los derechos humanos

- Las principales acciones que la gente considera que debe realizarse para que exista paz son: (1) la eliminación de la pobreza, (2) el respeto de los derechos humanos y (3) darle mayores oportunidades a los jóvenes.
- La gente considera positivo el papel de la comunidad internacional en la construcción de la paz, especialmente el que ha jugado la ONU. Para todas las instituciones internacionales medidas, siempre gana la percepción positiva de la gente con respecto a su involucramiento con la construcción de paz.
- La gente profundiza y menciona tres grupos de víctimas: (1) Los campesinos; (2) Los indígenas; (3) Los niños.
- El 46% está en desacuerdo en hacer justicia por sus propias manos.

Estudio Encuesta Nacional. ¿Qué piensan los colombianos después de siete años de Justicia y Paz?

Institución: Centro de Memoria Histórica

Año: 2011

Metodología: Centro de Memoria Histórica, Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a Víctimas, Fundación Social y (Conpaz) del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes

- Población: Población Regional/seis regiones geográficas (se cubrieron 42 municipios en 19 departamentos)

- Temas: conflicto, ONG y derechos humanos

- Muestra: El total de personas encuestadas fue 1843

- Clasificación muestra: Estrato 1 al 6/ Afectado/ no afectado

Percepción sobre el conflicto armado

- La Población General considera que el responsable de la violencia en el país es la guerrilla (32%), mientras que a los paramilitares les atribuyen un grado muy inferior (6%).
- La Población General dice percibir que el Gobierno tiene una importante responsabilidad en la situación violenta derivada del conflicto armado 28% (más que la de los paramilitares, narcotraficantes y la delincuencia común)
- Más de la mitad de la Población General considera que la guerrilla constituye una organización de simples delincuentes sin ideales políticos: 84% de Afectados y 81% de No Afectados.
- 70% de Población General, 68% de Víctimas Organizadas consultadas y 80% de Expertos de la muestra concuerdan en decir que los crímenes cometidos por guerrilleros y paramilitares son igual de graves, en consecuencia, opinan que ambos grupos deben ser castigados con la misma severidad.
- 74% de Afectados y 71% de No Afectados está en desacuerdo con que fue necesaria la acción paramilitar para combatir a la guerrilla. En la muestra exploratoria se observa la misma tendencia mayoritaria (81% de Víctimas Organizadas y 94% de Expertos).
- La mayoría de las personas encuestadas se manifestaron a favor de que los agentes del Estado involucrados en crímenes en el marco del conflicto armado fueran castigados con la máxima severidad posible: 73% de Afectados, 66% de No Afectados; 76% de Víctimas Organizadas y 75% de Expertos prefirieron este planteamiento, que además incluye la afirmación de que el Estado debe ser el primero en respetar los derechos humanos bajo cualquier circunstancia.

Opiniones y percepciones sobre las condiciones para la reconciliación en Colombia

Institución: Fundación Social, Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y USAID

Año: 2011

-Metodología: Fundación Social, OIM e Ipsos-Napoleón Franco

- Población: Mayores de 18 años pertenecientes a las regiones de Montes de María, Nariño, Norte de Santander y valle del Cauca
- Temas: conflicto armado y reconciliación
- Muestra: 1808 personas encuestadas
- Clasificación de la muestra: la muestra se divide en dos Afectados por el conflicto armado (30%) y No Afectados por el conflicto armado (70%).

Opiniones sobre la reconciliación

- Frente a la pregunta ¿para usted cuál es el dignificado de la reconciliación?, la respuesta del 50% de los encuestados pertenecientes al grupo No Afectados fue relacionada a vivir en paz, la del 34% estuvo relacionada con el fin del conflicto, la del 14% con el desarrollo. En el grupo de los Afectados los porcentajes fueron similares: 51%, 30% y 16% respectivamente.
- Frente a las acciones indispensables que se deben dar para que haya reconciliación en el país, para la población general (afectada y no afectada), el cese del conflicto (45% y 49%), el mejoramiento de las condiciones socio-económicas de las comunidades más afectadas (32% y 29%) y el reconocimiento de responsabilidades por las graves violaciones de derechos humanos (24% y 25%), son las tres opciones más mencionadas.
- Frente a la pregunta ¿La reconciliación implica que el Estado y los grupos armados ilegales lleguen a un acuerdo? El 93% de tanto de la población No Afectada como Afectada respondió estar de acuerdo.
- Vale la pena resaltar que frente a la pregunta sobre el tiempo que se requiere para lograr la reconciliación en Colombia la mayor parte de la población parece estar muy escéptica. El 52% de la población afectada y el 51% de la no afectada respondió no saber la respuesta, mientras que el 24% de la población afectada respondió que la reconciliación no se lograría nunca, así mismo lo hizo el 20% de la población afectada. Tan sólo el 12% de la población afectada respondió que ésta se lograría en menos de 10 años mientras que en la población no afectada el porcentaje es de 13%.

Percepciones sobre la verdad

- En cuanto a la verdad, tanto el 76% de la población afectada cómo no afectada respondió que conocer la verdad era esencial para lograr la reconciliación en el país. A continuación se muestra como este porcentaje varía dependiendo de las zonas más afectadas, desagregado a su vez en población afectada y no afectada.

Montes de María		Nariño		Norte de Santander		Valle	
Afectado	No afectado	Afectado	No afectado	Afectado	No afectado	Afectado	No afectado
84%	82%	85%	74%	73%	76%	74%	76%

- El 67% de la población afectada dijo estar de acuerdo con que se conforme una comisión especial que se dedique a investigar la verdad de los hechos ocurridos, un 13% dijo no estar de acuerdo y un 20% respondió no saber. Los porcentajes de la población no afectada fueron muy similares: 68%, 13% y 19% respectivamente.

Percepciones sobre la justicia

- La primera pregunta frente a este tema fue si realizar justicia frente a las graves violaciones a los derechos humanos y los delitos cometidos en el marco del conflicto armado contribuye a la reconciliación. Aquí la mayoría de los encuestados respondieron sí (78% afectados 77% no afectados) y sólo el 22% de los afectados y 23% de los no afectados niega la posibilidad.
- En cuanto a las sanciones diferentes a la cárcel a continuación se muestra un gráfico que resume estas opciones para Comandantes de grupos armados, miembros rasos y miembros de las Fuerzas Armadas.

Opiniones sobre otras posibles sanciones



Percepción sobre las medidas de reparación

- Para el 85% de la población afectada (80% de la no afectada) la reparación a las víctimas resulta muy importante para avanzar hacia la reconciliación. Este resultado es casi idéntico en las personas afectadas de las regiones de Montes de María (87%) y Nariño (82%). Sin embargo en Norte de Santander y en el Valle del Cauca los resultados varían, en el primero un 94% apoya dicha afirmación, mientras que en el segundo el porcentaje baja al 78%.
- Sobre quiénes deben reparar a las víctimas, la población afectada respondió como primera opción que sea aquel que hizo el daño con 80%, seguido por quien dirigió la acción con 78%, seguido por los máximos jefes de los grupos armados con 77%, luego el Estado colombiano con 68%, luego quien se benefició política o económicamente de los delitos con 51% y por último otros países con 31%.
- Entre las opciones más destacadas como métodos de reparación están 1. Que el Estado promueva el desarrollo comunitario en las zonas más afectadas (95% Afectados, 94% No Afectados), 2. Que el Estado otorgue bienes y servicios especiales a los afectados (95% Afectados 93% No Afectados) 3. Que los responsables colaboren con la localización de las personas secuestradas y desaparecidas (95% Afectados 94% No Afectados) 4. Que los responsables digan la verdad (93% Afectados 92% No Afectados). Que los responsables paguen cárcel con un 92% en ambos, población afectada y no afectada, y de que los responsables pidan perdón a las víctimas con 73% en ambos casos.

Actitudes frente a las garantías de no repetición

- Frente a este tema vale la pena destacar que la población está más optimista que en otros temas, pues el 53% de la población Afectada (50% de la No Afectada) respondió que el gobierno sí está haciendo lo correcto para lograr la no repetición.
- Al desagregar esta pregunta en las diferentes regiones se puede evidenciar que en Montes de María y en Nariño los porcentajes varían, pues en Montes de María suben a 73% población Afectada y 68% población No Afectada

mientras que en Nariño bajan a 35% población Afectada y 30% población No Afectada. Norte de Santander y Valle del Cauca presentan resultados muy similares a los de la población en general.

La cultura política de la democracia en Colombia (LAPOP, El Barómetro de las Américas)

Instituciones: Universidad de los Andes, USAID, Vanderbilt University, Observatorio de la Democracia

Año: 2004-2013

-Metodología: Barómetro de las Américas

-Población: Colombianos mayores de 18 años.

-Temas: Temas de opinión pública, sin embargo para este documento se tendrán en cuenta sólo las secciones de conflicto armado y derechos humanos.

-Muestra: alrededor de 1500 personas, con variaciones mínimas entre cada año.

Aunque los encuestados no son víctimas del conflicto armado, se debe destacar que entre el 2004 y 2012 el promedio de personas que declararon haber perdido un familiar fue de 23.73%, de aquellos que dijeron haber tenido un familiar desplazado fue de 19.46% y el promedio de aquellos que declararon tener un familiar exiliado fue de 4.9% todas causadas por el conflicto armado colombiano. Por lo anterior resulta pertinente analizar estas encuestas, pues existe una gran cantidad de encuestados que han sido víctimas del conflicto armado en el país.

En el estudio del **2013** este tema se abordó en términos generales, es decir si había sido víctima o no del conflicto armado. En la muestra nacional el 39.3% de los encuestados afirmaron haber sido víctimas, mientras que en la muestra en zonas de conflicto este porcentaje ascendió al 52.5%.

¿Qué piensan los colombianos del proceso de paz? Una mirada desde el Barómetro de las Américas (Estudio LAPOP 2013)

En el estudio realizado en el 2013 se incluyó una sección sobre el actual proceso de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC. Aquí se abordaron los temas de la Agenda General junto con la percepción generalizada del proceso. En este estudio se encuestaron a 1507 personas a nivel nacional y después de obtenidos los resultados se divide la muestra en las zonas de conflicto para hacer las respectivas comparaciones que se verán a continuación.

i. Justicia transicional¹

En primera instancia se preguntó a los encuestados sobre confesión de los crímenes por parte de miembros de las FARC, en zonas de conflicto el 15.4% respondió estar de acuerdo en que éstos no sean castigados siempre y cuando confiesen, mientras que el 72.3% respondió estar en desacuerdo. La media nacional mostró un resultado parecido, el 14.6% dijo estar de acuerdo mientras que el 75.7% dijo estar en desacuerdo. Luego hicieron la misma pregunta a los encuestados frente a los miembros rasos de las FARC. Aquí 18.8% de los encuestados en zonas de conflicto dijeron estar de acuerdo mientras que el 68.3% dijo estar en desacuerdo. Se puede ver que las personas tolerarían más la suspensión del castigo para los miembros rasos de las FARC que para los cargos más altos.

¹ Para abordar estas preguntas se hizo una escala de 1 a 7 donde entre 1 y 3 representa en desacuerdo, 4 representa indiferencia y entre 5 y 7 representa de acuerdo.

Miembros de las FARC**Miembros rastos de las FARC**

	zonas de conflicto	muestra nacional		zonas de conflicto	muestra nacional
de acuerdo	15,4%	14,6%	de acuerdo	18,8%	18,5%
indiferencia	12,3%	9,7%	indiferencia	12,9%	9,6%
en desacuerdo	72,3%	75,7%	en desacuerdo	68,3%	71,9%

Para continuar con el tema de la confesión de los crímenes la encuesta trae una pregunta sobre si el esclarecimiento de la verdad de los crímenes cometidos por las FARC contribuiría a la reconciliación. El 29% de los encuestados en zonas de conflicto respondieron estar de acuerdo mientras que el 53.1% dijeron estar en desacuerdo.

	zonas de conflicto	muestra nacional
de acuerdo	29,2%	28,0%
indiferencia	17,6%	15,7%
en desacuerdo	53,1%	56,3%

Siguiendo el tema de la reconciliación se preguntó a los encuestados si están de acuerdo o no en que someter a juicio a los miembros de las FARC responsables de cometer graves violaciones a los derechos humanos contribuiría a la reconciliación. El 46.8% de la muestra nacional respondió estar en desacuerdo mientras que el 41.2% respondió estar de acuerdo. Aquí vale la pena resaltar que en las zonas de conflicto sólo el 36.0% estuvo de acuerdo, cosa que muestra que la mayoría de las personas que habitan en zonas de conflicto no piensan que la judicialización contribuya a la reconciliación.

La mejor opción para los encuestados para lograr la reconciliación con los miembros de las FARC fue la reparación a las víctimas de éstos. Frente a este tema el 48.4% de los encuestados de la muestra nacional respondieron estar de acuerdo y el 37.0% respondieron estar en desacuerdo. Aunque esto no representa una gran diferencia se puede decir que frente a las demás es la única herramienta efectiva para lograr la reconciliación.

ii. El post-conflicto

Esta es la última sección de la encuesta LAPOP 2013 en donde se aborda el tema del post-conflicto. En la primera parte se busca indagar sobre las consecuencias que tendrían los desmovilizados de las FARC para la democracia, la seguridad y la economía. Para efectos de esta encuesta se tendrá en cuenta solo la segunda parte de esta sección donde se trata el tema del perdón frente a miembros desmovilizados de las FARC. Aquí se evidencia una clara diferencia entre los resultados de la muestra nacional y aquellos de las zonas de conflicto. El 54.9% de los encuestados de la muestra nacional contestaron no ante la pregunta: *¿usted ve posible el perdón y la reconciliación con los miembros desmovilizados de las FARC?*, mientras que el 39.8% respondieron sí. A diferencia de la muestra nacional, en las zonas de conflicto el porcentaje de quienes afirmaron que existía la posibilidad de perdón fue mayor (48.8%) de aquellos que la negaron (40.6%).

Perspectivas y percepciones sobre la justicia, el castigo y las FARC

Institución: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Año: Noviembre de 2013

- Metodología: YANHAAS por medio de muestreo estadístico, aleatorio a partir de llamadas telefónicas
- Población: Población urbana de 15 ciudades capitales
- Temas: Justicia para las FARRC
- Muestra: 1.005 encuestas

Este documento describe los resultados obtenidos en el módulo de justicia de la encuesta interna realizada en el mes de noviembre de 2013 por la OACP. Este módulo tocaba aspectos importantes sobre las actitudes de la gente acerca de la idea de que haya justicia en el país; las creencias en torno al castigo y la percepción sobre otros tipos de castigos alternativos diferentes a penas carcelarias para miembros desmovilizados de las FARC. Integrar todas estas creencias, actitudes y visiones con otros instrumentos conceptuales es necesario para disponer de mayor información y herramientas que permitan captar y entender el fenómeno “punitivo” de la opinión pública y de la cultura política y legal colombiana.

Percepciones sobre el tratamiento jurídico de las FARC: deben ir a la cárcel

- El 39.5% de los encuestados consideran la cárcel como la mejor forma de hacer justicia; el 15.1 % que haya reparación de víctimas; y el 11.9% que se acabe la violencia.
- La distribución regional y condición socioeconómica de esta percepción punitiva de la justicia arroja algunas diferencias significativas: el departamento de Atlántico (44, 6%) y la zona centro (43 %) son las más dadas a considerar la posibilidad de hacer justicia frente a las FARC como un asunto estrictamente de penas y cárcel.
- Quienes suelen invocar, según los datos, más esta visión de la justicia son los estratos altos. El 40.6% del estrato 3 y el 47.7% de los estratos 4, 5 y 6 creen que pagar cárcel es la mejor forma de hacer justicia; el 18 % del estrato 3 y el 20% de estratos 4, 5 y 6 creen la justicia está en reparar a las víctimas.
- El 70 % de los encuestados considera que no hay que rebajar las penas a los miembros de las FARC.
- Ante la pregunta ¿qué se debe hacer con las personas que se desmovilicen? el 40.3 % cree que se debe castigar tanto a líderes como guerrilleros de base que hayan cometido crímenes atroces y el 40.7% cree que de no hacerlo se estaría incurriendo en un acto de impunidad. Ambas percepciones sumadas monopolizan la visión del castigo con penas carcelarias.

Castigo distinto al carcelario para miembros de las FARC

- Sólo un 15% cree conveniente tener un trato más favorable o distinto al castigo carcelario. La mitad de los encuestados (51.4%) está totalmente en desacuerdo en una posibilidad de amnistía como en el caso del M-19; y sólo un 30% estaría de acuerdo en considerar para las FARC un tratamiento similar. Particularmente, en los estratos 4, 5 y 6 existe una diferencia significativa (55.2%) de rechazo a una posibilidad como el perdón a miembros de la guerrilla.

Tratamiento igualitario entre FARC y paramilitares

- El 53 % está totalmente de acuerdo que el tratamiento de los jefes de las FARC sea el mismo que se ofreció por parte del Gobierno Uribe a los jefes de los grupos paramilitares. Sobre esto vale la pena señalar que son los estratos 1 y 2 quienes ven con mayor favorabilidad que a los miembros de las FARC se les trate de igual forma que a los paramilitares, es decir, con penas menores, pero con privación de la libertad.
- Luego de casi dos años de haber puesto en marcha la Ley de Justicia y Paz, el 69% de los colombianos estaba de acuerdo en que se hiciera justicia (en términos formales) por la violencia ocurrida. De éstos, el 46% exigía castigos ordinarios de justicia penal y el 23% incluso exigía castigos más drásticos. Hoy esa percepción se mantiene prácticamente igual.

Penas alternativas

- Frente a la pregunta ¿qué alternativas existen entonces hoy en el imaginario de las personas en materia de justicia para los miembros de las FARC luego de que se desmovilicen y se firme un acuerdo final? El predominio de esas alternativas está en el campo de la **satisfacción de los derechos de las víctimas**: el 83.59% de los encuestados está de acuerdo que pidan perdón públicamente a las víctimas; el 81.81% que paguen multas para

que se cree un fondo para la reparación de las víctimas; y el 76.3% vería con buenos ojos que realizarán trabajo social y comunitario en zonas afectadas por la violencia.

- Sin embargo, el 70% está de acuerdo con el confinamiento o encierro en zonas vigiladas, 60.15% cárcel y el 60.15% monitoreo con brazaletes electrónicos.